

Colombia – En el Chocó se agudizan los riesgos para comunidades y procesos organizativos frente a control ejercido por el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia y la ausencia estatal.

Bruselas, 11/12/2025

La Red de [Oidhaco](#) manifiesta nuevamente¹ su preocupación sobre la situación que enfrentan las comunidades étnicas y campesinas del Bajo Atrato, departamento del Chocó. En este departamento la crisis humanitaria continúa profundizándose. Según OCHA², entre enero y septiembre de 2025, el Chocó ha sido una de las regiones más afectadas por el conflicto armado, registrando graves restricciones a la movilidad por paros armados, ataques contra la población civil, limitaciones al acceso humanitario y riesgos constantes para el personal y bienes de misiones humanitaria. Durante este periodo, el Chocó concentró cerca del 32% de la población confinada del país, reflejo de un deterioro sostenido de las condiciones de seguridad y de la ausencia de garantías para las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas.

En este contexto, solicitamos acciones urgentes frente a la situación específica del **Bajo Atrato**, zona fuertemente controlada por el grupo sucesor del paramilitarismo autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Según un recién informe³ elaborado por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), Chocó es uno de los focos más rentables: aquí esta estructura armada ilegal controla las rentas de la minería ilegal, el tráfico de personas migrantes, el narcotráfico, la extorsión, y el tráfico de las especies naturales de la selva. Además, según documenta el informe se han establecido una serie de “impuestos” sobre el comportamiento, incluidas las esferas íntimas y privadas, de las comunidades, de las que también el EGC se lucra. Asimismo, una investigación reciente del Environmental Investigation Agency, (EIA US), llama la atención sobre la creciente deforestación ilegal de este territorio y **la exportación de madera talada ilegalmente a la UE, EEUU y Canadá**⁴. En efecto, Según Global Forest Watch, en 10 de los 13 municipios que conforman la cuenca del Atrato, se perdieron 35.000 hectáreas de bosque primario y 73.000 de cobertura arbórea entre 2020 y 2023⁵.

Reclutamientos forzados, violencia sexual, amenazas, asesinatos selectivos, cooptación y silenciamiento de las comunidades - muchas de ellas beneficiarias de medidas cautelares y provisionales de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de medidas cautelares de la Jurisdicción Especial para la Paz - siguen aumentando, mientras que persiste una fuerte ausencia de instituciones civiles estatales, así como falta de respuestas efectivas⁶.

Esta dramática realidad que enfrentan las comunidades coincide con **los diálogos “socios jurídicos” que el Gobierno nacional ha adelantado con dicha estructura armada ilegal**, en los cuales se ha hablado de cinco

¹ Oidhaco. [En las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curbaradó, personas defensoras de ddhh y ambiente en riesgo](#), 16 de mayo de 2025.

² OCHA. [Informe de Tendencias e Impacto Humanitario en 2025](#) | Datos acumulados entre enero - septiembre de 2025. 24 Oct 2025.

³ Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), [EGC en Chocó. Violencia, poder y miedo](#), junio de 2025.

⁴ Environmental Investigation Agency (EIA US), [Transformando el bosque](#), mayo de 2025.

⁵ Voragine. [Todo en la vida tiene precio. El macabro y millonario negocio del EGC en Chocó](#). 25 de julio de 2025.

⁶ Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (J&P). [Informe urgente: Patrullaje ilegal de sujetos armados a plena luz del día acrecienta el temor en las comunidades de la cuenca del río Curvaradó](#), julio de 2025.

municipios como posibles territorios de arranque⁷. Sin embargo, otros territorios que permanecen bajo fuerte control político, social y económico, ejercido a través de la presencia armada en la región quedarían fuera de esta fase inicial, lo que genera una fuerte preocupación por los riesgos y la posible profundización de la vulnerabilidad para las comunidades que no serían priorizadas. Además, preocupa fuertemente la falta de información con respecto a lo que se habría negociado en Catar, país donde arrancaron los diálogos, sin que a la fecha se conozca siquiera el marco jurídico bajo el cual empezó este proceso, que estos días ha terminado su segundo ciclo, con la participación de representante del Estado Español⁸, de Suiza y Noruega como países mediadores, además de Catar.

Es por ello que desde la Oidhaco solicitamos a la Unión Europea, y en particular al Estado Español y a Suiza y Noruega:

- Instar al Gobierno de Colombia **a garantizar transparencia en el proceso adelantado** con el autodenominado EGC, así como **la participación efectiva, con garantías, y la escucha directa de las comunidades** que habitan y resisten en estos territorios desde décadas, asegurando que sus preocupaciones y prioridades sean incorporadas en cualquier ruta de negociación o desescalamiento previsto.
- Instar al Gobierno de Colombia y en particular al Consejero Comisionado de Paz, **a socializar de forma inmediata cual es el mecanismo de monitoreo previsto** de cara los avances del proceso de este grupo; Y cuáles son las autoridades civiles y militares responsables del seguimiento, en terreno, de la situación de las comunidades étnico – campesinas que se encuentran en la zona. Asimismo, especificar cuál es la componente nacional, y cuál la internacional prevista para dicho monitoreo, y en qué medida están involucradas las comunidades. En este sentido, también es prioritario que Estado Español, Suiza y Noruega **aclaren cuál es el alcance de su acompañamiento al proceso.**
- Urgir a las autoridades estatales nacionales y territoriales a adoptar **medidas inmediatas, concertadas y con enfoque territorial, que permitan fortalecer la protección, la participación y la autonomía** de las comunidades del Chocó.

Asimismo, es fundamental que la comunidad internacional, así como el Gobierno y el Estado Colombiano, **hagan presencia sostenida en estos territorios, apoyen firmemente aquellas iniciativas de autoprotección colectiva y construcción de paz territorial (como las Zonas Humanitarias y de Biodiversidad), y aseguren que las autoridades étnico-territoriales puedan seguir ejerciendo su autogobierno propio** en el marco de la ley colombiana, sin coacción, libres de presiones y de la cooptación hoy en día ejercida por el EGC como parte de su estrategia para hacerse con el control local de esta región. E imponiendo su modelo económico extractivista, incluso ejerciendo como autoridad absoluta por encima de la institucionalidad civil y militar de Colombia, **erosionando así el estado social de derecho.**

Solo mediante un diálogo transparente y con la participación directa de las comunidades será posible avanzar hacia condiciones reales de seguridad humana y dignidad.

⁷ Indepaz. [El acuerdo entre el Gobierno y el Ejército Gaitanista de Colombia: ¿un paso hacia la paz o un riesgo de impunidad?](#), 19. Sep. 2025.

⁸ El País. [España se suma a la negociación con el mayor grupo criminal de Colombia](#), 28 de noviembre de 2025.